

# LOS ENSAYISTAS

Nos. 22-25

c 1988

JOSE LUIS GOMEZ-MARTINEZ

AND

FRANCISCO JAVIER PINEDO

ISSN 0148-8627

Printed and bound at Rose Printing Company, Inc., Tallahassee, Florida. Funding for Los Ensayistas comes from the Center for Latin American Studies with additional budgetary support from the Department of Romance Languages.

# Los Ensayistas

Georgia Series on Hispanic Thought

CHILE: 1968 - 1988

Edición

de

JOSE LUIS GOMEZ-MARTINEZ

FRANCISCO JAVIER PINEDO

Assistant to the Editors

Teresa P. Smotherman

1987-1988

Nos. 22-25

## LA IGLESIA EN CHILE, 1968-1988

Cristián Parker G.

La relevancia de la Iglesia--especialmente la católica--en Chile se debe no sólo al hecho de que constituye la religión mayoritaria. La Iglesia católica en Chile se ha caracterizado por tener una activa participación en la historia social y política del país.

A diferencia de algunos países latinoamericanos donde el catolicismo ha sido más bien un factor conservador, en Chile el catolicismo ha contribuido a levantar corrientes sociopolíticas que impulsan los cambios. En plena sintonía con el Concilio Vaticano II y la conferencia de Obispos de Medellín (1968) la Iglesia chilena impulsó una serie de renovaciones en su vida y su acción pastoral, pero también contribuyó por medio de su magisterio, de su doctrina social, y de sus laicos a la formulación de corrientes de influencia política que denuncian las injusticias sociales y propugnan un cambio social para la superación del subdesarrollo.

La orientación progresista de la Iglesia católica ha tenido, sin embargo, uno de sus mayores desafíos en el Régimen Militar que encabeza el General Pinochet. La situación social y política se vió profundamente alterada con la llegada de los militares al poder en 1973. La sistemática violación a los derechos humanos, la ausencia de libertad, junto al incremento de las desigualdades sociales, han constituido objeto de preocupación constante de una Iglesia que durante todos estos años se ha atribuido un rol de «voz de los sin voz». Con todo, a partir de la institucionalización del régimen con la Constitución de 1980, y a raíz de los cambios internos en la Iglesia católica, el papel jugado por ella ha variado hacia una posición de mayor moderación.

Es posible afirmar, entonces, que la evolución reciente de la Iglesia católica en Chile es paradójica: su mayor obstáculo no lo ha encontrado en un Gobierno marxista sino en un Gobierno que dice defender al cristianismo. En efecto, la Iglesia católica se ha inspirado en una orientación progresista estos años. Probablemente ello le evitó verse directamente confrontada a un Régimen

socialista, elegido democráticamente, pero de inspiración marxista, como el de Salvador Allende (1970-1973). En cambio, su firme defensa de los derechos humanos y del pueblo, especialmente de los pobres, la han llevado a enfrentar al Régimen Militar del General Pinochet (1973-) que dice defender la «civilización occidental y cristiana», contra la amenaza del «comunismo internacional». Es precisamente durante este período autoritario que las Iglesias evangélicas, representativas de corrientes religiosas minoritarias, han pasado a tener un papel más protagónico en la vida pública del país. En efecto, ellas constituyeron una fuente de apoyo religioso y moral al Régimen autoritario durante sus primeros diez años, pero luego han surgido corrientes evangélicas importantes que han defendido valores democráticos criticando a un Régimen que viola la libertad y la justicia.

En este artículo pretendemos analizar socio-históricamente la evolución de la Iglesia católica durante los últimos veinte años en Chile. Nuestra atención estará centrada en el caminar histórico de la Iglesia católica, especialmente en la actuación pública de su jerarquía. Particularmente describiremos y analizaremos su rol sociopolítico y su influencia cultural y moral en la sociedad. Será también necesario hacer algún alcance a las Iglesias evangélicas que, en conjunto con el catolicismo, conforman lo grueso del campo religioso en la sociedad chilena.

### I. UNA IGLESIA QUE IMPULSA CAMBIOS SOCIALES EN UN CONTEXTO DE CAMBIOS (1968-1973)

El período que va desde 1968 hasta 1973 está signado por los cambios. En esos años se sucedieron vertiginosamente una serie de cambios y transformaciones a todo nivel en la sociedad y en el campo religioso. En 1969 en un Colegio católico, en un sector de clase alta, atendido por la Congregación de Holy Cross (norteamericana), se organizó una Semana Social donde se citaba el documento de Medellín de los Obispos. La reacción de las elites conservadoras fue violenta.<sup>1</sup> Se acusó de que había «infiltración marxista en un colegio católico». Se organizaron reuniones y se agitó un debate público. Lo ocurrido en esa oportunidad ejemplifica lo que estaba sucediendo con el catolicismo en esos años.<sup>2</sup> Congregaciones, agentes «religiosos», líderes laicos optaban por los cambios y privilegiaban el trabajo pastoral entre los pobres del campo y la ciudad desatendiendo a la influyente y adinerada «educación católica» particular. Se trataba de un éxodo desde las clases dominantes hacia la humilde choza en la periferia urbana y entre los campesinos empobrecidos.

El espíritu renovador que soplabla en la Iglesia chilena de esos años, y que se remonta a una larga tradición de preocupación por la «cuestión social», (desde el socialcristianismo de principios de siglo hasta la poderosa democracia cristiana de los años 60) se expresó en el Sínodo de Santiago. El VIII Sínodo de la Iglesia realizado en 1967 en Santiago reflejaba el influjo refrescante del Concilio Vaticano II (1962-1965). El Sínodo de Santiago fue un gran espacio de debates en los cuales se criticaba el autoritarismo de la jerarquía, el paternalismo de la beneficencia católica, el clasismo de colegio católicos en beneficio de sectores privilegiados, en fin, se abogaba por una mayor participación laical, se respaldaba a los curas obreros y se solicitaba celebrar la Eucaristía en las casas particulares, etc. «Todo esto estaba rompiendo con una tradición de siglos»<sup>3</sup> afirmaba un historiador de la Iglesia. En 1968 se realizaba la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín (Colombia), que ha tenido una importancia enorme en la difusión y el desarrollo de una corriente progresista liberadora en el catolicismo latinoamericano.<sup>4</sup> En Chile, la Conferencia Episcopal a través de su carta pastoral «Chile, voluntad de ser»<sup>5</sup> invitaba a los católicos a un claro compromiso con la realidad, a trabajar por la justicia social y a poner sus energías al servicio de los pobres por encima de divisiones partidistas e impulsados por su fe.

Sin embargo, hacia 1967 comenzaron a percibirse los signos de desgaste de las reformas impulsadas por la Democracia Cristiana en el Gobierno.<sup>6</sup> Entre 1967 y 1973 se vive un ascenso creciente y sostenido de las luchas populares. Las demandas sociales insatisfechas se expresan en movilizaciones, huelgas y «tomas» de fábricas, fundos y escuelas. En este contexto los líderes del cristianismo progresista van derivando hacia posiciones más avanzadas. En el año 1967 se produce la «toma» de la Universidad Católica de Chile, en Valparaíso y en Santiago. Se inicia así un proceso de reforma profunda del sistema universitario. Un año más tarde el movimiento «Iglesia Joven» se toma a la Iglesia Catedral de Santiago conmoviendo a la Iglesia chilena y universal y a la opinión pública nacional. Su manifiesto pedía una Iglesia pobre, libre y servidora del hombre: «Hay que crear una Iglesia que predique a Cristo Redentor, ayudando al pueblo a redimirse de la explotación, comprometiéndose con los oprimidos en su lucha de liberación...».<sup>7</sup>

La dinámica profética observada en el interior de los círculos eclesiales tiene un movimiento paralelo en el mismo sentido en el campo político. Entre los católicos progresistas que militaban en

la Democracia Cristiana surgen voces disidentes que no ven alternativas reales de transformación del injusto sistema capitalista en el marco de dicho partido. En el período que va desde el 68 al 73 se producen dos escisiones en el interior de la democracia cristiana: en 1969 se crea el MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria) que se adhiere a la candidatura de Salvador Allende y en 1971 se crea la Izquierda Cristiana que también finaliza apoyando al Gobierno de la Unidad Popular.

En el Episcopado nacional se observa esta evolución de los grupos católicos hacia posiciones más radicales con cierta preocupación. Los cambios impulsados por la Iglesia oficial debían hacerse evitando toda forma de violencia. Al mismo tiempo la alianza y cercanía con corrientes marxistas resultaban inquietantes. De ninguna manera podía aceptarse acciones como la toma de la Catedral de Santiago. Pero los problemas internos no eran los desafíos mayores para la Iglesia de la época.

Justo antes de que Allende, encabezando una coalición de marxistas, laicos y cristianos, pero con predominio comunista y socialista, resultara democráticamente elegido a la Presidencia de la República, un General encabezó en diciembre de 1969 un levantamiento militar frustrado. La actitud de la iglesia fue clara, tajante y profética: condenó la posibilidad de un Golpe de Estado y su inminente peligro de represión y atentado a los derechos humanos defendiendo abiertamente al sistema democrático.<sup>8</sup> En las elecciones presidenciales de 1970 los cristianos se presentaban divididos a tres bandas. Alessandri, el candidato de la derecha, representaba a los católicos conservadores y anticomunistas; Tomic, de la Democracia Cristiana, encarnaba al cristianismo progresista inspirado en la doctrina social de la Iglesia y con la simpatía de la Jerarquía; un cierto grupo de cristianos, representados en el MAPU, apoyaban al candidato de la Izquierda, Allende. Aunque los cristianos eran minoría en la coalición izquierdista, a su electorado, mayoritariamente creyente, no se hacía problema en votar por un marxista y masón como Allende.<sup>9</sup>

Una vez asumido el mando Allende solicitó la realización del tradicional *Te Deum*, misa de acción de gracias con que asumían los mandatarios. La Iglesia interpretó aquello como un gesto de buena voluntad y respeto a la libertad religiosa. Como señalara el entonces Obispo Secretario General de la Conferencia, Carlos Oviedo, Allende siempre buscó un entendimiento con los Obispos y «para él prevaleció el parecer de éstos frente a otros consejeros, cuando se trataba de personas o cosas de la Iglesia».<sup>10</sup> La Iglesia,

por su parte, se atuvo a su tradición de respeto y colaboración con los gobiernos legítimamente constituidos, prescindiendo de un compromiso partidario. Tal posición no estuvo exenta de dificultades. La derecha católica y especialmente el integrismo criticaban constantemente este «compromiso de la Jerarquía con el comunismo». La propia Iglesia se vio desafiada por el surgimiento desde sus filas de un grupo que optó resueltamente por el socialismo.

En abril de 1971 se realizó una jornada de 80 curas obreros y sacerdotes que trabajaban en medios populares. Su título es muy sugerente: «Participación de los cristianos en la construcción del socialismo en Chile». En julio unos 200 sacerdotes se reúnen para reflexionar sobre «El sacerdocio y el compromiso de la Iglesia con la justicia». En abril de 1972 se celebra el Primer Encuentro Latinoamericano de Cristianos por el Socialismo.<sup>11</sup> La actitud de la Jerarquía fue, en un primer tiempo, moderada. Las tesis que defenderán durante todo el periodo de la Unidad Popular serán: misión espiritual y no política de la Iglesia, libertad política de los cristianos y unidad de la Iglesia.

En mayo de 1971 la Conferencia Episcopal saca el documento clave para comprender su postura frente al socialismo «Evangelio, política y socialismo».<sup>12</sup> En este *Documento de Trabajo* los Obispos hablan detenidamente del Evangelio como exigencia de liberación integral, de servicio privilegiado a los pobres y de la prescindencia política de la Iglesia. De la responsabilidad política de los laicos y la necesidad de garantizar la libertad en todo proceso de socialización advirtiendo sobre los riesgos de un socialismo inspirado por el marxismo. No hay una condena abierta de la «vía chilena al socialismo» (que buscaba transformaciones en el marco democrático) pero tampoco se la apoya.

La convivencia entre la Iglesia y el Gobierno de Allende fue, en general, buena, aunque a veces estuvo sometida a ciertas tensiones como lo fue con el proyecto educacional del Gobierno conocido como ENU.<sup>13</sup> Los Obispos reconocían ciertos aspectos positivos de las reformas, pero criticaban la falta de participación en su gestión e implementación y la no consideración de valores cristianos. A petición de la Iglesia el Gobierno terminó por postergar dicho proyecto.

El compromiso de la Iglesia con los valores de la justicia y la libertad la llevaron a tomar una actitud de respeto y vigilante acompañamiento del proceso de democratización hasta 1973. Poco antes del Golpe de Estado, frente a la aguda crisis que sacudía al

país, la Iglesia procuró el diálogo entre el Gobierno y la Democracia Cristiana a fin de evitar el estallido de una guerra civil. El Cardenal Silva Henríquez, duramente criticado por la derecha por no haber condenado enfáticamente al marxismo, impulsado por su profunda vocación democrática llamó a cesar la violencia, a defender el bienestar del pueblo, la vida y la paz. Como es sabido, esa instancia mediadora fracasó y se desencadenó el Golpe Militar que derrocó al Gobierno democrático de Salvador Allende.<sup>14</sup>

## 2. LA IGLESIA, DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS FRENTE AL AUTORITARISMO MILITAR (1973-1980).

El Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 truncó el proceso de cambios sociales impulsados por el gobierno de la Unidad Popular. El golpe revirtió la corriente de transformaciones y el ascenso del movimiento popular iniciado ya con el gobierno de la Democracia Cristiana. El régimen militar se asentó desde sus inicios en una doble política: en la destrucción del sistema democrático reprimiendo a la sociedad civil, especialmente a las organizaciones populares; y en la implantación de una política económica neoliberal que privilegiaba al libre mercado y a los empresarios en desmedro de los trabajadores y de políticas sociales. La justificación ideológica del nuevo régimen estaba en la defensa del «orden y la institucionalidad quebrantada» por la amenaza del comunismo. Sin embargo, sus fundamentos más sólidos y sistemáticos es posible encontrarlos en la Doctrina de la Seguridad Nacional, doctrina originada por los militares norteamericanos, que justifica la supresión de las libertades y la violación a los derechos humanos en función de una «guerra total» contra un enemigo interno que es el «comunismo internacional».<sup>15</sup>

La primera declaración de los Obispos fue el 13 de septiembre de 1973. En ella no hay una condena del Golpe, posiblemente porque los Obispos lo veían como un desenlace inevitable, pero además, porque pensaban que verdaderamente los militares cumplirían su palabra de reestablecer pronto el sistema democrático. Al mismo tiempo ya los Obispos manifestaban sus aprehensiones frente al proceso que se iniciaba y particularmente frente al trato de los derechos humanos.<sup>16</sup> En general la Iglesia desde 1974 en adelante estará centrada en dos graves problemas nacionales: la violación a los derechos humanos (DDHH) a causa de los atropellos y la represión; y la violación a los derechos económicos y sociales a causa del modelo económico implementado.

Si hasta abril de 1974 la Iglesia había actuado discretamente en defensa de los perseguidos, la situación cambia con su declaración «La Reconciliación en Chile».<sup>17</sup> Allí la Iglesia critica por primera vez en forma pública al Régimen por la violación a los derechos humanos. Los Obispos plantean que «la Iglesia debe ser la voz de todos y especialmente de los que no tienen voz». La situación económica empeoraba y la represión se incrementaba. La respuesta del pueblo cristiano fue organizar «comedores infantiles» en las poblaciones marginales y grupos solidarios en la base. Frente a la represión las Iglesias, en forma ecuménica, organizaron el Comité de Cooperación para la Paz en Chile.<sup>18</sup> Las parroquias y conventos servían de lugar de refugio y sacerdotes, religiosas y laicos colaboraban para que los perseguidos obtuvieran asilo político en las embajadas. No pocos cristianos y religiosos fueron detenidos ejerciendo ese ministerio de caridad con el perseguido. La detención de la Dra. Sheila Cassidy, religiosa inglesa, hizo noticia y suscitó una dura polémica entre el Arzobispado y dirigentes católicos integristas.<sup>19</sup> En fin, cediendo a la fuerte presión del propio Gobierno el Cardenal Silva Henríquez cerró el Comité pro Paz, pero rápidamente lo reemplazó por la Vicaría de la Solidaridad a principios de 1976.

Desde 1976 hasta la fecha, atravesando por diversos períodos de mayor o menor tensión con el Gobierno, la Vicaría de la Solidaridad, un organismo que depende directamente del Arzobispado de Santiago, se ha constituido en un símbolo de la lucha por los derechos humanos en Chile.<sup>20</sup> El Gobierno y la prensa oficialista reiteradamente han acusado a dicho organismo de estar «infiltrado por el marxismo». Muchos de sus funcionarios, incluso alguno de sus Vicarios, como Mons. Precht y Mons. Gutiérrez, han sido hostigados e insultados públicamente, y varios de sus funcionarios han sido víctimas de atentados, algunos han sido detenidos y uno fue brutalmente degollado en marzo de 1985.<sup>21</sup>

La Vicaría no sólo ha sido reconocida por su labor de protección jurídica, sino también por el apoyo que presta a las múltiples acciones solidarias con las víctimas de la represión y la pobreza además de encargarse de recoger y sistematizar la información adecuada sobre la situación de los DDHH en el país. Los informes de la Vicaría han sido muy tomados en cuenta por los organismos internacionales, especialmente por la Asamblea General de las NNUU que ha condenado sistemáticamente al Régimen chileno por violación a los DDHH.<sup>22</sup> La Vicaría ha obtenido varios premios y reconocimientos internacionales de parte

de organismos dedicados a la defensa de los DDHH. En 1979 el propio Cardenal Silva Henríquez fue a recibir el premio que la ONU otorgaba a su labor.

En el discurso de la Jerarquía eclesial durante el período que va desde el Golpe de Estado hasta 1980-1982, hay una actitud global de crítica al Régimen y particularmente en cuanto al respeto inexistente de los DDHH, libertades básicas y derechos económicos y sociales del pueblo chileno. Es posible afirmar que surge una verdadera fundamentación teológico-ética desde la propia práctica de una Iglesia comprometida con la defensa de los DDHH en Chile.<sup>23</sup>

Sin embargo, hay que reconocer que la composición de la Conferencia Episcopal, en la cual coexisten tendencias conservadoras y progresistas aunque con predominancia de ésta última en este período, producen un efecto sobre el discurso episcopal que lo tiñe de una ambigüedad fundamental, producida por las transacciones entre quienes apoyan al Régimen y quienes son sus críticos. Se critican los abusos de poder, incluso a veces al propio modelo neoliberal capitalista y autoritario, y la Doctrina de la Seguridad Nacional. Pero paralelamente el discurso episcopal intenta también ganarse la buena voluntad de los militares e incluso en ocasiones legitima el Golpe militar que quebró la institucionalidad democrática.<sup>24</sup>

En numerosas oportunidades los Obispos han debido defender la libertad de la Iglesia para actuar y hablar, en función de su propia misión evangelizadora, en la defensa de la dignidad del hombre y especialmente de los más pobres. Sin una normalización institucional y frente a un Gobierno que no ponía plazos para el retorno al pleno imperio de un Estado de Derecho, la Iglesia, por voz de su Jerarquía, fue progresivamente acentuando sus llamados a institucionalizar el país y avanzar pronto hacia una plena democracia. El conflicto en torno a la institucionalización entre la Iglesia y el Gobierno tuvo dos momentos de relevancia. En 1978 con la publicación del documento «Humanismo Cristiano y Nueva Institucionalidad»<sup>25</sup> y sobre todo con la posición crítica oficial que tomó la Iglesia frente al Plebiscito de 1980 en el cual fue aprobada la Nueva Constitución en un dudoso acto eleccionario.<sup>26</sup>

Revisando las relaciones Iglesia-Gobierno Autoritario en este período destacan dos incidentes que reflejan el grado al que pudieron llegar las tensas relaciones. En agosto de 1976 tres Obispos chilenos participaban en una reunión con otros Obispos latinoamericanos en Riobamba, Ecuador. Fueron detenidos por el

Régimen Militar ecuatoriano y a su arribo a Chile fueron violentamente agredidos por un grupo de manifestantes que posteriormente la Iglesia identificó como funcionarios de la DINA, policía secreta del Régimen. Ello rebasó el vaso en las tensas relaciones, agravadas por la detención de un abogado de la Vicaría de la Solidaridad y por la expulsión del país de dos abogados colaboradores de ese mismo organismo. Mons. Santos, entonces presidente de los Obispos habló de «trizadura» en las relaciones con el Gobierno. Esta situación era para él producto del afianzamiento en el país de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Al año siguiente en una declaración pública los obispos hablan explícitamente de los derechos humanos, solicitan la colaboración de las autoridades para esclarecer la suerte de los detenidos-desaparecidos<sup>27</sup> y agregan: «Si se han cometido abusos o arbitrariedades--a veces inevitables--más vale reconocerlo y arbitrar medidas para que no se repitan».<sup>28</sup> El año 1978 fue proclamado como «Año de los Derechos Humanos» y el Arzobispado de Santiago organizó en noviembre un gran Simposio Internacional sobre el tema. Durante ese año la «guerra interna» generaba una huelga de hambre de los familiares de los detenidos-desaparecidos. La misma justicia de EE.UU. llegaba hasta el corazón de la DINA, buscando a los asesinos del ex-Canciller Orlando Letelier en Washington, en 1976.<sup>29</sup> Hacia fines de año se descubría en una mina de cal abandonada en la localidad de Lonquén, una veintena de cadáveres que posteriormente se determinó correspondían a detenidos-desaparecidos que habían sido fusilados sumariamente. Correspondió al Obispo Auxiliar, Mons. Alvear, denunciar esta situación, y el Comité Permanente de los Obispos sacó una declaración en la cual solicitan al Gobierno que se termine con la tortura, la violencia y el terrorismo: «Lamentamos tener que decir que hemos llegado a la persuasión de que muchos, si no todos los detenidos-desaparecidos, han muerto, al margen de toda ley».<sup>30</sup>

Pero la labor de defensa de los derechos humanos no sólo se realizaba desde las altas esferas dirigentes de la Iglesia. La labor de defensa de las libertades cívicas y los derechos humanos y del pueblo, se ha convertido en una práctica cotidiana para las comunidades, militantes cristianos y agentes pastorales que trabajan en el pueblo. Numerosas organizaciones de base han ido surgiendo preocupadas de dar alimento, solidaridad y refugio a quienes eran víctimas del autoritarismo: los pobladores, la juventud, las mujeres, los trabajadores y los campesinos. Lentamente la Iglesia en la base ha constituido un espacio en torno

al cual se va reorganizando el tejido social. El pueblo se va rearticulando venciendo el miedo, la atomización, y la propaganda del sistema, a fin de luchar por su dignidad y sus derechos conculcados. Quizás la más noble y abnegada defensa de los derechos humanos debemos encontrarla en la anónima labor de estos cristianos de base que junto a no-creyentes de buena voluntad, desde el sufrimiento, el dolor y la opresión van recorriendo un camino de reencuentro en torno a ciertos valores fundamentales como la dignidad del hombre, la justicia, la libertad y la democracia.

### 3. LA BUSQUEDA DE LEGITIMACION RELIGIOSA PARA EL REGIMEN MILITAR.

La Iglesia católica ha sido un contrapeso decisivo a la represión bajo el régimen Militar. Sin embargo, como sabemos, todo régimen busca ampliar la base de sus legitimaciones ideológicas a fin de asentar su hegemonía sobre el conjunto de la sociedad. Para este fin el Régimen militar ha contado con la ayuda de segmentos muy significativos de las Iglesias Evangélicas, así como de un sector de la Iglesia católica. Desde un primer instante el Régimen ha hecho profesión de fe y afirma estar defendiendo la civilización occidental y cristiana contra la amenaza atea y totalitaria del comunismo. La propia declaración de Principios de la Junta de Gobierno, redactada en 1974 con asesoría de un grupo de católicos integristas, sostiene que su inspiración básica está en el humanismo cristiano.<sup>31</sup>

Si bien es cierto que algunos Obispos católicos fueron muy cautos en sus primeras declaraciones inmediatas al Golpe de Estado, en buena medida porque no se podía evaluar la magnitud de la represión, otros expresaron su expresivo alivio y gratitud hacia los militares por haber liberado a Chile del caos marxista: «Las declaraciones de muchos Obispos a continuación del Golpe fueron mucho más específicas y claras en brindar legitimidad al nuevo gobierno que aquellas del Cardenal Silva y de los líderes de la Conferencia Episcopal».<sup>32</sup> El Arzobispo Emilio Tagle de Valparaíso, segunda ciudad del país, en los días inmediatos aparecía en televisión declarando que agradecía a los militares por salvar a Chile de «caer irrevocablemente bajo el poder marxista». Aunque reconocía que se había derramado algo de sangre ello resultaba compensado por garantizar un «Chile como nación libre y soberana»<sup>33</sup> Oraciones y declaraciones semejantes formularon en esos días y en 1974 los obispos Augusto Salinas, de Linares, Eladio Vicuña, de Chillán, el Vicario Castrense, Mons. Guillmore,

y los obispos Francisco Valdés de Osorno y Juan Francisco Fresno de La Serena.<sup>34</sup> Declaraciones que recibieron la más amplia cobertura periodística.

Pero un apoyo simbólico-religioso adicional y muy bienvenido le fue prestado al General Pinochet y los militares por parte de un sector mayoritario de las Iglesias Evangélicas que se agruparon en trono al Consejo de Pastores. La declaración solemne de adhesión al Régimen Militar, formulada a fines de 1974 en el edificio de gobierno, establece claramente una teología de apoyo al poder dominante. La intervención de las FF.AA. en «el proceso histórico de nuestro país» es apreciada por los evangélicos como ...la respuesta de Dios a la oración de todos los creyentes que ven en el marxismo a las fuerzas satánicas de las tinieblas en su máxima expresión».<sup>35</sup> Durante todos estos años se inauguró una tradición inexistente durante la república democrática: los Te Deum evangélicos, acto religioso con que el protestantismo sustituye la función que tradicionalmente asumía la Iglesia católica oficial. Estos Te Deum se celebran generalmente en una fecha intermedia entre el 11 de septiembre (conmemoración del Golpe militar) y el 18 de septiembre (conmemoración de la Independencia de Chile) como una muestra viva, litúrgica, religiosa, de agradecimiento a los militares por haber salvado a Chile de las guerras del marxismo.

En el Consejo de Pastores estaban representadas las más importantes Iglesias protestantes, aunque con predominancia pentecostal. Para comprender cabalmente el significado de esta legitimación religiosa de los evangélicos al Régimen Militar hay que decir que Chile es uno de los países latinoamericanos con un porcentaje relativo muy elevado de protestantes-pentecostales en su población.<sup>36</sup> El anticatolicismo de los pentecostales proviene no sólo de su teología que tiene rasgos fundamentalistas y dualistas, sino también del hecho de que su propia legitimidad e identidad debió abrirse paso en una sociedad fuertemente hegemonizada por el catolicismo oficial, aliado del poder, y monopólico en el campo religioso. Han sido objeto del menosprecio de la sociedad dominante y del uso instrumental por parte de los políticos, lo que ha fortalecido su visión negativa hacia la política.<sup>37</sup> Estas sospechas frente a la política fue muy bien capitalizada por el discurso y la práctica del Régimen Militar que no sólo atacaba a los políticos, reprimía dirigentes sino que además se declaraba apolítico.

Sin embargo, la principal razón del apoyo protestante al Régimen hay que encontrarla en la necesidad de legitimación extrasocial por parte del Régimen autoritario. Las acciones críticas del sistema autoritario y la defensa de los derechos humanos asumida por el catolicismo oficial condujeron a la búsqueda de un sistema de legitimaciones religiosas supletorias, que el gobierno encontró en estas Iglesias evangélicas especialmente de tradición pentecostal.<sup>38</sup> La penetración evangélica en las Fuerzas Armadas y de Orden, otrora espacio privilegiado de influencia del catolicismo, ha sido otro medio a través del cual el Régimen ha buscado asentar en valores religiosos la legitimidad de sus acciones muy vinculadas a una ideología militarista que encaja perfectamente con una visión fundamentalista y dualista de lucha entre el bien y el mal, entre Dios y el demonio marxista. La Iglesia Evangélica Uniformada que aglutina al conjunto de confesiones en las FF.AA. y Carabineros, es una clara expresión de la lucha simbólico-religiosa por parte del Régimen a fin de contestar la predominancia de la influencia católica, ahora en el propio seno de los institutos armados.<sup>39</sup> Sin embargo, el catolicismo uniformado, representado por la Vicaría Castrense, no se deja sustituir tan fácilmente. El nuevo Vicario Castrense, Mons. Matte, en años recientes reitera la legitimación religiosa y teológica del Golpe Militar y de la obra de las FF.AA. en el poder. «Hace doce años el rosario empezó a rezarse sin descanso y María hizo el milagro: era la segunda independencia de Chile».<sup>40</sup> Constantemente el discurso oficialista del Régimen, y el propio General Pinochet, invocan la protección de «Dios todopoderoso» y de la Virgen del Carmen «patrona y generalísima de las FF.AA.».<sup>41</sup>

A pesar del apoyo considerable que el Régimen de Pinochet ha recibido de los católicos integristas y de buena parte de los evangélicos, hay que decir que dicho apoyo se va desdibujando por un sector de las Iglesias protestantes. Desde hace unos cinco años la Confraternidad Cristiana de Iglesias, integrada por presbiterianos, metodistas, algunos pentecostales y otros, ha venido planteando la necesidad de que el pueblo evangélico se integre en forma decidida a la lucha por el respeto de la vida y ha solicitado un pronto retorno a la plena democracia en el país.

#### 4. UNA IGLESIA QUE PIDE LA RECONCILIACION Y EL PLENO RETORNO A LA DEMOCRACIA (1980-1988)

El período que va desde 1980 hasta 1988 está caracterizado por la vigencia de la Constitución Política de 1980 que

institucionaliza un Régimen autoritario y personalista dando plenos poderes a los militares y a Pinochet hasta 1989, año en que se debe iniciar una «democracia protegida». El plebiscito que aprobó la Constitución de 1980, suscitó un debate en el cual la Iglesia intervino estableciendo los requisitos para que el acto fuera limpio. Dichos requisitos no fueron cumplidos y el Gobierno se proclamó vencedor.<sup>42</sup> El Gobierno reinstaló su sede en el tradicional Palacio de La Moneda<sup>43</sup> y solicitó a la Iglesia un *Te Deum* solemne para entronizar en marzo de 1981 al General Pinochet como presidente constitucional. Luego de una viva polémica en el interior de la propia Iglesia, el Cardenal Silva, con apoyo del Vaticano, accedió a la celebración de dicho acto religioso. Con ello la Iglesia consagró la institucionalidad del Régimen, aún cuando en su fuero interno la desaprobaba.

En todo este período la Iglesia ha intensificado su demanda de democracia.<sup>44</sup> Si en la etapa anterior el énfasis estaba puesto en los derechos humanos, ahora, a partir de la dictación de la Constitución, adquiere mayor importancia la reivindicación de la plena participación ciudadana y de la reconciliación entre los chilenos. Este cambio en la posición oficial de la jerarquía eclesial se había iniciado ya en 1978 con el documento *Humanismo Cristiano y Nueva Institucionalidad* y se desarrolla con *El Renacer de Chile* (1982), y *Evangelio, Ética y Política* (1984). Según los Obispos hay tres caminos para resolver cristianamente la crisis social y moral del país: el respeto a la dignidad del hombre, el reconocimiento al valor del trabajo y el regreso a una plena democracia. Tres principios que reiterarán en sucesivas declaraciones durante esos años.<sup>45</sup>

El nombramiento de un nuevo Arzobispo de Santiago en reemplazo de Mons. Silva Henríquez, a quien le correspondía renunciar por edad, abrió una esperanza de distensión en las relaciones entre la Iglesia y el Gobierno. El nuevo Arzobispo, Mons. Fresno es reconocidamente más moderado que su antecesor. Sin embargo, la Iglesia mantuvo, en líneas gruesas, sus orientaciones básicas, llamando a la reconciliación, al diálogo y al retorno pronto a la democracia. Por otra parte, las esperanzas de los círculos católicos conservadores y del Gobierno de que los nuevos nombramientos de Obispos (todos moderados o conservadores desde 1984 en adelante) cambiarán radicalmente el rostro de una Iglesia progresista y la aproximarán rápidamente al Régimen se vieron frustradas al menos hasta 1986.

En 1983 estalló la agitación social y se iniciaron las «Protestas Nacionales» convocadas por las organizaciones sociales opositoras. Ya en 1982 la situación económica se tornaba crítica y ésta empeoró en 1983. La recuperación de la economía experimentada hasta 1981 se venía al suelo azotando principalmente a los trabajadores y a las mayorías pobres, pero afectando también a una clase media que se había endeudado considerablemente en la época del *boom* económico. La respuesta del Gobierno fue enérgica y la violencia represiva fue en aumento proporcional a la masividad de las protestas. En ese contexto los Obispos emiten una declaración en la cual hacen eco de descontento, condenan la violencia y llaman al diálogo, legitimando implícitamente a las protestas populares al afirmar que «disentir es un derecho innato que todos reconocen».<sup>46</sup> Y agregan citando al Papa, «cuando el diálogo entre los gobernantes y el pueblo no existe, la paz social está amenazada o ausente, es como si se viviera en un estado de guerra».

La Iglesia hace un llamado a la cordura y se propone como mediadora del diálogo para dar pasos positivos hacia una real democracia.<sup>47</sup> En agosto, luego de la más cruenta protesta con un saldo de cerca de 100 muertos, el Gobierno acepta el diálogo y Mons. Fresno actúa como intermediario. Pero esta iniciativa se empantana y finalmente fracasa a causa de la falta de apertura de las autoridades. La Iglesia replica hacia fines de 1983 aclarando que torturadores y cómplices quedan excomulgados si no se arrepienten y solicitan la reestructuración de los organismos de seguridad del Régimen, fin al exilio, creación de nuevas fuentes de trabajo, respeto a los trabajadores y pluralismo en los medios de comunicación social, especialmente la TV.<sup>48</sup>

La tensión entre el Gobierno y la Iglesia crece y llega a un punto álgido a propósito del asesinato del sacerdote André Jarlan durante un allanamiento de la policía en un día de protesta en septiembre de ese año. Los Obispos, respaldando el trabajo de los misioneros en poblaciones populares piden que «la sangre de esta víctima inocente convierta nuestro odio en amor y nuestra violencia en paz». Mons. Fresno afirma el derecho de celebrar la misa de exequias de Jarlan en la Catedral. «No es posible que todo sea instrumentalizado» declara.<sup>49</sup> A fines de año es dinamitado un templo parroquial en Punta Arenas. Se reimplanta el Estado de Sitio y a raíz de un encuentro de Obispos con exiliados en Europa el Ministro de Interior acusa verbalmente a la Iglesia y expulsa al Vicario de la Solidaridad. Mons. Fresno

protesta pero pide abandonar toda tentación de violencia e invita a una Jornada de ayuno y oración.<sup>50</sup>

A mediados de 1985 Mons. Fresno es investido como Cardenal de la Iglesia lo que respalda la labor de la Iglesia en Chile. Su discurso durante estos años ha estado centrado en la reconciliación y permanentemente ha buscado el diálogo con las autoridades, procurando un entendimiento con la oposición moderada. De aquí surge la iniciativa de agrupar a un amplio espectro opositor (excluyendo a comunistas y a un sector socialista), el Acuerdo Nacional, que sienta las bases para una salida pacífica hacia la plena democracia. Sin embargo nuevamente las gestiones de Fresno se estrellan contra la intransigencia del Régimen y especialmente del General Pinochet. La oposición moderada se siente frustrada, cunde el descontento y gana terreno la estrategia de la movilización social que los comunistas y grupos más radicalizados ven como plataforma para una insurrección armada. El año 1986 será proclamado por la oposición como «el año decisivo» para derrocar a Pinochet.

El año 1986 fue decisivo, pero no precisamente para la oposición sino para el Gobierno. Luego de una exitosa Jornada de Protesta muy reprimida en julio de ese año, se descubrieron arsenales de guerra ocultos en el desierto del Norte que pertenecían al frente guerrillero Manuel Rodríguez, cercano al Partido Comunista. Ese hecho sumado al atentado fallido al propio General Pinochet a principios de septiembre desencadenaron una feroz represión sobre la población y toda expresión opositora. El revés opositor fue tan grande al punto de que nunca más se pudo organizar una Jornada Nacional de Protesta como las que llegaron a desestabilizar al país en 1983 y 1984. A partir de 1987 en adelante la oposición ha debido someterse al itinerario constitucional programado por el Régimen, olvidando sus demandas por elecciones libres y aceptando el Plebiscito contemplado para octubre de este año 1988.

Durante 1986 la Iglesia se vio desafiada por la violencia de las protestas de julio y luego por la represión, sobre todo desde septiembre. El Gobierno expulsa de Chile a tres sacerdotes franceses que trabajaban en la población de La Victoria con la falsa acusación de ser agitadores. La propia conferencia Episcopal los defiende, pero el Arzobispo no fue enfático en la condena. La invitación que hicieran los Obispos a modificar la Constitución cayó en el vacío<sup>51</sup> así como su denuncia de la violencia policial y represiva.<sup>52</sup>

El evento eclesial de mayor magnitud en los últimos años ha sido, sin duda, la visita del Papa Juan Pablo II a Chile en abril de 1987. El Papa visitó el país a raíz del éxito de su mediación entre Chile y Argentina por un conflicto limítrofe que tuvo al borde de la guerra a ambos países a fines de 1978. La oportuna gestión de la Iglesia chilena, del Vaticano y de la Iglesia argentina evitó una catástrofe de proporciones entre naciones hermanas. La paz, como valor superior ha sido siempre reafirmada por la doctrina y la práctica de la Iglesia. El Papa, como ya es habitual, congregó a multitudes tocando la fibra sensible de la religiosidad de las masas católicas. Sus discursos en general fueron bastante moderados, pero inequívocos en apoyar la labor de los Obispos y de la Iglesia en Chile, respaldando el llamado al pronto retorno a la democracia. Sin embargo, su encuentro con el pueblo tan significativo, y los pasajes atractivos de su discurso<sup>53</sup>, quedaron empañados por su visita al Palacio de la Moneda donde rezó con Pinochet y, saliéndose del protocolo, saludó junto a él desde un balcón al público presente.

La visita papal revitalizó las energías religiosas y el trabajo pastoral de la Iglesia, pero no tuvo consecuencias políticas directas, salvo servir de receso político cuyo levantamiento fue muy bien aprovechado por el Régimen. A ello debe sumarse el hecho de que todos los nombramientos de nuevos Obispos desde 1986 en adelante han recaído en hombres de línea conservadora lo que ha reequilibrado a la Conferencia Episcopal volviendo más cautas sus acciones y declaraciones.

El avance restaurador en la Iglesia católica universal, desde 1986 en Chile, va provocando una serie de conflictos internos, sobre todo porque se enfrenta con criterios inquisitoriales a la creciente y significativa corriente liberadora de la Iglesia.<sup>54</sup> Durante todo el período autoritario la renovación en la Iglesia y la práctica de defensa de los derechos humanos y del pueblo pobre ha desarrollado una Iglesia que nace del pueblo, en las comunidades eclesiales de bases. La Conferencia Latinoamericana de Obispos en Puebla (1979) revitalizó la «opción preferencial por los pobres» y respaldó el trabajo de una evangelización liberadora. Sin embargo, esta nueva forma de vivir la fe cristiana, más encarnada e histórica, en un ambiente comunitario, participativo y democrático, choca contra la tendencia restauradora que la cuestiona y frena. El debate en torno a la teología de la liberación en la Iglesia universal repercute también en Chile, aunque en forma moderada ya que las condenaciones a dicha teología no

prosperan, en parte a causa de la fortaleza de esta corriente en la pastoral popular y en cierta jerarquía eclesial.<sup>55</sup>

La evolución de la Iglesia en todo este período ha transformado sus antiguos referentes sociales y su propia posición social. Si durante años el catolicismo fue una religión en la cual se expresaba en forma privilegiada la cultura oficial y las élites aristocráticas, ahora comienzan a tener más importancia las clases medias y, sobre todo, las clases populares. Durante el Régimen Militar hay un notorio distanciamiento de las clases acomodadas católicas respecto a la línea oficial de la Jerarquía, en tanto que la «opción por los pobres» lleva a las clases pobres de la ciudad y el campo a ver que la Iglesia está ahora «más cerca de los pobres que de los ricos».<sup>56</sup> Con todo, la posición oficial de la Jerarquía acompaña el proceso social y político entregando orientaciones morales e iluminando el quehacer conflictivo de los cristianos en la realidad contingente. Si bien las posiciones individuales de los Obispos tienden a polarizarse, colectivamente continúan afirmando la necesidad de la reconciliación y del retorno a la democracia en el contexto de una confrontación política cada vez más aguda.<sup>57</sup>

La Iglesia desde 1987 ha llamado a participar en el proceso político que culmina con el Plebiscito, pero ha fijado con claridad las condiciones para que éste sea válido. Los Obispos están de acuerdo en insistir en la necesidad de retornar a una plena democracia y en llamar a la reconciliación en la justicia y en la verdad, buscando los caminos del entendimiento y evitando el enfrentamiento. En Asamblea Plenaria apoyaron el llamado a la inscripción electoral a la ciudadanía, y definieron las condiciones básicas para que el Plebiscito tenga autoridad moral: voto secreto y libre, cantidad representativa de electores, escrutinios imparciales. En declaraciones posteriores han dicho que debe haber libertad de información y propaganda en los medios de comunicación, especialmente televisión, deben cesar los estados de Emergencia y el intervencionismo electoral de funcionarios públicos y de las FF.AA. Agregan que «el voto debe inspirarse en modificaciones que sean coherentes con la fe que se profesa»<sup>58</sup>: respeto por el bien común, la solidaridad especialmente hacia los pobres, la justicia, la paz y la libertad y el respeto a los derechos humanos. Al tomar esta actitud la Iglesia se autoasigna el rol de garante moral de la limpieza, transparencia y cordura en el proceso eleccionario que posibilitaría conducir a una modificación de las actuales circunstancias y abrir los cauces a una plena participación ciudadana recuperando la soberanía para el pueblo.

## 5. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

El campo religioso de una sociedad capitalista subdesarrollada como la chilena está influido por los conflictos propios de este tipo de sociedad. La tradición cultural y política en estas sociedades está preñada de connotaciones religiosas que provienen de la matriz cristiana. En torno a las cuestiones religiosas los liberales, positivistas, masones y luego los marxistas han debido abrirse paso en su lucha por las libertades cívicas y la democratización de la sociedad. Pero con la renovación radical de las Iglesias, especialmente con la renovación del catolicismo, éste dejó de ser un argumento que justificaba el atraso y el conservadurismo y descolgó a los clásicos argumentos anticlericales. En el caso chileno esta evolución es irrefutable y se verifica con el hecho de que no fueron las fuerzas marxistas en el Gobierno (1970-1973) las que impugnaron a la Iglesia, sino principalmente el Régimen Militar (1973- ) autodefinido como cristiano, el que se ha enfrentado a una Iglesia renovada y progresista.

La Iglesia es un actor sociológico complejo. En este trabajo hemos enfocado su rol primordial en la producción y reproducción de valores y representaciones sociopolíticas, y hemos dejado de lado una serie de significaciones y funciones de su práctica y discurso que tienen tanta o mayor influencia en la conformación de la cultura nacional. Con todo, por parcial que haya sido nuestra óptica para abordar a la Iglesia, hemos podido observar a lo largo de este recorrido histórico-religioso a una institución que tiene una capacidad muy flexible para adaptarse a las circunstancias, absorbiendo sus contradicciones internas, evitando verse quebrada o anulada, manteniéndose viva como una institución religiosa y moral de enorme influencia. La práctica y el discurso de una Iglesia comprometida con la dignidad del hombre y con los valores de la reconciliación y la democracia enfrentada a un Régimen que los niega, le ha hecho ganar prestigio sociocultural, al punto de que hoy en Chile no existe otra institución que pueda garantizar por sí sola la representatividad de valores consensuales que corresponden al patrimonio de la nación y del pueblo.

Sin embargo, la Iglesia (particularmente la católica) ha actuado durante todos los años de autoritarismo como una instancia supletoria de la vitalidad y autonomía propia de la sociedad cívica. En la medida en que las diferentes organizaciones intermedias de la sociedad (organizaciones cívicas, sindicales, gremiales, políticas, vecinales, culturales, etc.) han estado perseguidas, proscritas,

controladas, vigiladas y atomizadas, la Iglesia, dada su autonomía relativa frente al Estado, ha jugado el rol de canal de expresión de las mayorías populares frente al Estado autoritario, y al mismo tiempo ha actuado como agente regulador de conflictos y garante moral metasocial de valores e instituciones nacionales. Su figuración pública ha estado sobredimensionada dadas las circunstancias extraordinarias, pero una vez que el país recupere una institucionalidad democrática en el cual la vida política no esté proscrita, la Iglesia pasará a ocupar un papel más circunscrito a su propio ámbito de acción simbólico-religioso.

Las consideraciones anteriores no significan necesariamente que la Iglesia cese sus influencias positivas hacia el cambio social. Significa que pasará a ejercer un papel más moderado en tanto que institución, pero que procurará reorientar sus actuales influencias políticas desmedidas hacia el campo cultural donde tiene competencias institucionales incuestionables. Esta tendencia parece además verse fortalecida por las opciones estratégicas de la corriente restauradora en el catolicismo que día a día gana terreno y fuerza en la vida eclesial.

En lo inmediato la Iglesia está llamada a ejercer un rol mediador en el proceso de transición a la democracia en Chile. Pero está visto que su peso institucional y su influencia simbólica no tienen un impacto suficiente en la modificación de las políticas oficiales del autoritarismo. Aún cuando sus políticas cumplen una variada gama de funciones que alimentan una resistencia a la dominación autoritaria, la Iglesia católica, a pesar del apoyo internacional, sigue siendo vulnerable a las políticas estatales orientadas a socavar su autoridad, prestigio e influencia social.<sup>59</sup>

El interés de la Iglesia por representar los valores que encarnen a la nación, como la justicia, la paz y la democracia, la llevan a evitar un enfrentamiento directo con el autoritarismo. Ella busca tender puentes hacia las FF.AA. de tal suerte que entre el Régimen y la oposición se abran las vías pacíficas de diálogo que posibilite lograr un mínimo consenso social y político capaz de abrir las puertas a una verdadera institucionalidad democrática.<sup>60</sup> Aunque la Iglesia en su jerarquía está atravesada por las posiciones polarizadas que sacuden al país, entre quienes defienden el orden establecido y al Estado, y quienes proféticamente se sienten portavoces del pueblo oprimido, la búsqueda de la preservación de la unidad institucional actúa como amortiguador de tensiones internas y terminan por moderar el discurso eclesial. La moderación de la posición oficial de la Iglesia actúa sobre la base

de un consenso mínimo común; el privilegio de alternativas pacíficas de solución a los conflictos sobre toda tentación a la violencia subversiva. Hay en algunos Obispos y sacerdotes una evidente apertura hacia posiciones más radicales en lo sociopolítico, pero se condena firmemente al terrorismo de ambos extremos. Sin embargo, la falta de firmeza en la condena de ciertas cuestiones que atentan contra valores evangélicos fundamentales estos últimos años, lleva a ciertos sectores de la Iglesia comprometida con el pueblo a denunciar a cierta jerarquía por anteponer la supervivencia institucional a la prédica religiosa del Evangelio.

Precisamente en los momentos de crisis las instituciones se ven amenazadas en sus posibilidades y perspectivas de supervivencia. El proceso de transición a la democracia que vive Chile está muy lejos de ser tranquilo; por el contrario, la crisis se agrava y se tiende un manto de incertidumbre acerca de los grados de violencia que éste puede alcanzar. Enfrentada a una situación conflictiva como la que se avecina, en la Iglesia se abrirá paso una tendencia que procure de todas maneras la supervivencia institucional aún a costa de transar principios y de olvidar su postura profética y progresista. Pero esta tendencia deberá enfrentarse en el debate interno con la contraria: para la cual la misión evangelizadora, es decir, la defensa de valores ético-religiosos, constituyen una fuente de convicción ética intransable.

La Iglesia católica podría acompañar la transición desde las demandas del pueblo por una auténtica reconciliación en la justicia y en la verdad, democratizando a la sociedad y privilegiando el destino de los más pobres. O bien acompañará dicha transición desde una postura política, menos comprometida, haciendo más concesiones al poder y cuestionando las posturas más proféticas en su interior. La Iglesia corre el peligro de volcarse a una pastoral exclusivamente sacramental que alimente la religiosidad tradicional de las masas, pero abandonando su tradición y su vocación histórica que la ha impulsado a promover corrientes frescas de renovación en la Iglesia y en la sociedad. Del destino que tengan las futuras posiciones de la Iglesia en Chile y en América Latina dependerá si consolida su bien ganado prestigio o si por el contrario se embarca en una alternativa sin horizonte histórico previsible.

Cristián Parker G.  
Academia de Humanismo Cristiano

## BIBLIOGRAFIA

- Aldunate, José; Fernando Castillo; Joaquín Silva. *Los derechos humanos y la Iglesia chilena*. Santiago de Chile: ECO, s.f.
- Caro, Luis. *El discurso de la jerarquía eclesiástica chilena, en el campo político, en el periodo 1973-1981*, Memoria de Licencia en Sociología. Louvain la Neuve: Université Catholique de Louvain, 1983.
- Castillo, Fernando. *Iglesia liberadora y política*, Santiago: ECO, 1986.
- Cavallo, Ascanio. *Los Te Deum del Cardenal Silva Henríquez en el Régimen Militar*. Santiago: Ed. Copygraph, 1988.
- Comblin, Joseph. «La doctrina de la Seguridad Nacional», en *Dos ensayos sobre Seguridad Nacional*, Santiago: Vicaría de la Solidaridad, Arzobispado de Santiago, 1979. 9-191.
- Correa, Enrique; José Antonio Viera-Gallo. *Iglesia y dictadura*, Santiago: CESOC, Ed. Chile-América, 1986.
- Frühling, Hugo. *Autoritarismo y defensa de los derechos humanos: estudio de la Vicaría de la Solidaridad en Chile*. Cuaderno de Trabajo N<sup>o</sup> 2, Programa de Derechos Humanos. Santiago: Academia de Humanismo Cristiano, 1985.
- Lagos, Humberto. «Proyecto político autoritario y mesianismo». En *Religión y proyecto político autoritario*. Ed. Arturo Chacón y Humberto Lagos. Santiago: PRESORLAR, 1986. 29-77.
- Lagos, Humberto y Arturo Chacón. *La religión en las Fuerzas Armadas y de Orden*. Santiago: Ed. REHUE, 1986.
- Meneses, Aldo. *Valores y producción social de la realidad. El caso del antagonismo ideológico entre la Iglesia católica chilena y el Gobierno Militar: 1973-1984*. Disertación doctoral. Louvain-la-Neuve: Université Catholique de Louvain, 1988.
- Parker, Cristián. «Cristianismo y movimiento popular en Chile», *PLURAL*, 4 (primer semestre 1985), 9-36. Instituto para el Nuevo Chile.
- Parker, Cristián; Manuel del Ferrari; Ronaldo Muñoz y Equipo. *Lo que nos deja el Papa*. Santiago: Cuadernos Estepa, 1987.
- Richard, Pablo. *Cristianos por el Socialismo, historia y documentación*. Salamanca: Sígueme, 1976.

Salinas, Maximiliano. *Historia del pueblo de Dios en Chile*. Santiago: CEHILA, Ed. Rehue, 1987:

Sepúlveda, Juan. «Pentecostalismo y democracia. Una interpretación de sus relaciones», en: *Comunidad Teológica Evangélica: Democracia y Evangelio*, Ed. REHUE, 1988, pp. 229-50.

Smith, Brian. *Church strategies and human rights in Latin America*. Working papers. Washington, D.C.: Woodstode Theological Center, Georgetown University, 1979.

-----, *The Church and Politics in Chile, Challenges to Modern Catholicism*. New Jersey: Princeton University Press, 1982.

#### NOTAS

<sup>1</sup>El influyente diario conservador *El Mercurio* publicó en primera plana en dicha oportunidad el titular que mencionamos. Entre los alumnos se había provocado un coincidente violento y el Centro de Padres, controlado por sectores de derecha, reaccionó agriamente. Siete sacerdotes de dicha congregación, chilenos y norteamericanos, debieron abandonar el país luego del Golpe de Estado de 1973. El Colegio fue el único establecimiento católico en ser intervenido militarmente.

<sup>2</sup>Lo sucedido con esta congregación no era, sin embargo, lo más publicitado. El proceso semejante vivido por otras Congregaciones dedicadas a la educación, como los Jesuitas, los Sagrados Corazones y algunas Congregaciones Femeninas, tuvo mucho mayor impacto en aquella época.

<sup>3</sup>Salinas, 1987: 216.

<sup>4</sup>Cf. Conclusiones de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Documentos de Medellín, Celam, Bogotá, 1968.

<sup>5</sup>*Revista Católica*, No. 1009, 1968, pp. 5340 - 5352.

<sup>6</sup>En 1967 se produjo una crisis económica que provocó una serie de huelgas y duras críticas de la oposición a las políticas de reformas llevadas a cabo por el Gobierno demócrata Cristiano de Eduardo Frei.

<sup>7</sup>Movimiento Iglesia Joven, *Por una Iglesia servidora del pueblo*, Santiago, 1968, hoja volante.

<sup>8</sup>Correa, Viera-Gallo, 1986: 87-9.

<sup>9</sup>De acuerdo al análisis de Brian Smith sobre la incidencia de la religión en la votación política se puede afirmar que ésta no influía mayormente, salvo en el caso de las pequeñas minorías de no-creyentes que se inclinan por la izquierda. A pesar de ello, la izquierda se ganó progresivamente el voto de los católicos (practicantes y no practicantes) durante sus tres años en el poder. Cf. Smith 1982: 214 ss.

<sup>10</sup>Meneses, 1988: 82.

<sup>11</sup>Cf. Richard, 1976.

<sup>12</sup>*Documentos del episcopado. Chile 1970-1973*, Ed. Mundo, Santiago, 1974, pp. 58-100.

<sup>13</sup>En 1972 el gobierno de la Unidad Popular presentó un proyecto de reforma educacional que fue vivamente criticado por la oposición. La crítica de la Iglesia al proyecto de reforma educacional conocido como Escuela Nacional Unificada (ENU) probablemente fue el momento de mayor tensión vivido entre el Gobierno de Allende y la Iglesia católica.

<sup>14</sup>Hablando del Golpe de Estado que desencadenó una guerra larvada y una atroz represión, el Cardenal Silva Henríquez declaró en 1974 «Hubiéramos querido evitarla, hemos hecho todo lo posible por evitarla, al menos así lo pensamos. Tal vez, también, nosotros hemos sido culpables y no, hemos hecho todo lo que deberíamos... Hoy día lloramos el dolor del padre que presencia el -desgarramiento de su familia..». Salinas, 1987: 214.

<sup>15</sup>Cf. Comblin, 1979.

<sup>16</sup>«Declaración del Comité Permanente del Episcopado sobre la situación del país» - 13.08.73, en *Documentos del Episcopado*, op. cit. p. 174.

<sup>17</sup>Cf. *Documentos del Episcopado, Chile 1974 - 1980*, Mundo, Santiago, 1982, pp. 11-17.

<sup>18</sup>El Comité de Cooperación para la Paz en Chile fue un organismo ecuménico de la Iglesia Católica, Luterana, Judía y de varias confesiones protestantes que desde 1973 hasta 1975 trabajó en la ayuda humanitaria y la defensa jurídica de los perseguidos por el Régimen Militar.

<sup>19</sup>En noviembre de 1975 varios sacerdotes y religiosas fueron arrestados por prestar auxilio médico a dirigentes del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario) acosados por los servicios de seguridad para darles muerte. El Cardenal Silva Henríquez justificó en nombre del Evangelio la práctica de la misericordia, salvando vidas, incluso a costa de graves

consecuencias políticas. Jaime Guzmán, un alto asesor legal de la Junta Militar y dirigente del integrismo católico criticó por los medios de comunicación al Cardenal, le acusó de cometer serios errores e instó a denuncia a los «terroristas» a la policía. El Arzobispado de Santiago amenazó a Guzmán con la excomunión por desconocer y minar el poder de las autoridades eclesiales.

<sup>20</sup>Sobre la Vicaría de la Solidaridad ver Frühling, 1985; Smith, 1979; Aldunate, Castillo, Silva.

<sup>21</sup>La persecución a la Vicaría de la Solidaridad por parte del Régimen o de sus organismos paramilitares ha sido constante. Numerosas han sido las veces en que funcionarios de la Vicaría han estado presos o han recibido amenazas de muerte. Actualmente la Fiscalía Militar mantiene un proceso contra el Dr. Ramiro Olivares y el abogado Gustavo Villalobos, acusados injustamente de prestar apoyo a grupos terroristas. Manuel Parada, un funcionario de la Vicaría fue brutalmente degollado por un comando paramilitar junto a dos compañeros, en marzo de 1985.

<sup>22</sup>El Gobierno de Chile ha sido condenado sistemáticamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1973 hasta la fecha por violaciones a los derechos humanos.

<sup>23</sup>Ver la mejor sistematización teórica de la práctica y el discurso de la Iglesia chilena en la defensa de los derechos humanos en José Aldunate, Fernando Castillo, Joaquín Silva.

<sup>24</sup>Dicen los Obispos: «reconocemos el servicio prestado al país por las Fuerzas Armadas al liberarlo de una dictadura marxista que parecía inevitable y que había de ser irreversible» (...) «creemos justo reconocer que las FF.AA. interpretaron, el 11 de septiembre de 1973, un anhelo mayoritario y, al hacerlo, apartaron un obstáculo inmenso para la paz». («Evangelio y paz», en *Documentos...*, Op. cit. pp. 110 y 111). La legitimación del Golpe Militar debe comprenderse como una transacción del sector progresista del Episcopado con el sector conservador que apoyaba firmemente al Régimen, única manera de que el documento fuera firmado por la totalidad de los Obispos. Por supuesto, los sectores de izquierda han criticado esta postura «conciliadora» de la Iglesia con el Régimen y los sectores eclesiales más comprometidos con los derechos humanos han acusado a los Obispos de renunciar a su deber profético inspirado en el Evangelio. Cf. Caro, 1983.

<sup>25</sup>En la declaración «Humanismo Cristiano y Nueva Institucionalidad» (4.10.78), el Comité Permanente invita a una reflexión. Allí definen a la fe no como ideología ni partido

político sino como instancia moral y liberadora. Hablan de la crisis política y de las bases morales para construir una futura institucionalidad: igualdad y participación, respeto a los derechos humanos y a las libertades cívicas, y hacen sugerencias para los cambios institucionales en el país. Critican la doctrina de la seguridad nacional, valoran la democracia y reivindican la autonomía universitaria y el derecho de los trabajadores.

<sup>26</sup>Cf. declaración «Sobre el Plebiscito», 23.8.80, en *Documentos del Episcopado*, op. cit. pp. 432-34.

<sup>27</sup>Se conoce como *detenidos-desaparecidos* a aquellas personas que han sido detenidas o secuestradas por organismos de seguridad del Régimen y luego nunca más se supo su paradero. La Vicaría de la Solidaridad acredita por lo menos unos 700 casos.

<sup>28</sup>«Nuestra Convivencia Nacional», 25.3.77, en *Documentos del Episcopado*, pp. 164-172.

<sup>29</sup>En Washington, en septiembre de 1976, estalla una bomba mortal en el auto de Orlando Letelier, ex-Canciller del Gobierno de Allende y exiliado político en EE.UU. Muere también su secretaria norteamericana. Posteriormente la justicia norteamericana establece que los autores materiales son un grupo de exiliados cubanos y los autores intelectuales la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) del Régimen de Pinochet.

<sup>30</sup>Además agregan en dicha declaración: «Las personas llamadas detenidos-desaparecidos, que alcanzan a varios centenares, por los antecedentes reunidos y presentados al gobierno, y salvo algunas posibles excepciones, deben, a nuestro parecer, darse por detenidas *por los servicios de seguridad del gobierno* (subrayado en el texto)»... «Desgraciadamente hemos llegado a la conclusión de que el gobierno no realizará una investigación a fondo de lo ocurrido...». «Corresponde al gobierno y no a la Iglesia dar la solución a este problema». «Sin embargo, no podemos callar ante lo ocurrido. Tenemos que decir que el mandamiento de no matar sigue siendo fundamento de toda civilización y, desde luego, de todo humanismo cristiano. Ningún fin puede justificar el uso de medios ilícitos. Matar a un hombre, al margen de toda ley, es un delito del cual protestamos en nombre de Dios, Creador y Padre de todos los hombres». *Declaración acerca de los detenidos-desaparecidos*, Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, 9.11.78.

<sup>31</sup>Cf. Declaración de Principios de la Junta de Gobierno. Santiago de Chile, 1974.

<sup>32</sup>Smith, 1982: 292.

<sup>33</sup>*El Mercurio*, 14 de noviembre de 1973.

<sup>34</sup>Cf. Smith, 1972: 291-293.

<sup>35</sup>Ver Lagos y Chacón, 1985: 5.

<sup>36</sup>Las Iglesias pentecostales representan cerca del 80% de los protestantes en Chile. Los pentecostales chilenos nacieron como Iglesias nacionales en medios populares preferentemente, como grupos religiosos minoritarios, discriminados y marginados por la sociedad. El anticatolicismo ha sido un signo de su identidad.

<sup>37</sup>Cf. Juan Sepúlveda, 1988.

<sup>38</sup>Cf. Lagos, 1986.

<sup>39</sup>Cf. Lagos, Chacón, 1986.

<sup>40</sup>Lagos, 1986: 71.

<sup>41</sup>Cf. Lagos, 1986.

<sup>42</sup>Conferencia Episcopal de Chile, «Declaración sobre el Plebiscito», 23.8.80, *ibid.*, pp. 432-434.

<sup>43</sup>En el Palacio de la Moneda, casa de gobierno durante la época democrática, murió el Presidente Allende durante el bombardeo del 11 de septiembre de 1973. El Palacio fue reconstruido especialmente para que Pinochet asumiera en él su mandato constitucional en 1981. Sobre los conflictos Gobierno-Iglesia de los años 80 y 81 ver Ascanio Cavallo, 1988.

<sup>44</sup>Cf. Correa, Viera-Gallo, 1986: 102 ss.

<sup>45</sup>Cf. *Documentos del Episcopado, Chile 1981-1983*, Santiago: Ed. Mundo, 1984.

<sup>46</sup>«Más allá de la Protesta y la Violencia», 24.6.83. *ibid.*, pp. 117-18.

<sup>47</sup>Cf. Conferencia Episcopal de Chile, «Para una real democracia», 14.10.83, *ibid.*, pp. 121-23.

<sup>48</sup>Cf. «Un camino cristiano», Declaración de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile, 15.12.83, *ibid.*, pp. 146-48.

<sup>49</sup>Cf. Gloria Stanley, «Relaciones Gobierno-Iglesia. Un largo y difícil camino», *Qué Pasa*, N<sup>o</sup> 764, 1985, pp. 50-53.

<sup>50</sup>Cf. Mons. Juan Francisco Fresno Larraín, *Carta del Arzobispo a la Iglesia de Santiago*, Arzobispado de Santiago, 18 de noviembre de 1984.

<sup>51</sup>Cf. Conferencia Episcopal de Chile, *Justicia o violencia*, 7 de abril de 1986.

<sup>52</sup>Cf. Conferencia Episcopal de Chile, *¡Felices los constructores de la paz!*, 13 de julio de 1986.

<sup>53</sup>Cf. C. Parker, J.M. de Ferrari, R. Muñoz, 1987.

<sup>54</sup>En estos últimos años han sido nombrados Mons. Moreno, Mons. Medina y Mons. Cazzaro reconocidos partidarios del Régimen Militar. El último nombramiento en julio de 1988 fue del superior del Opus Dei en Chile, A. Rodríguez.

<sup>55</sup>Sobre la Iglesia que se desarrolla en el pueblo ver C. Parker, 1985; F. Castillo, 1986.

<sup>56</sup>En una reciente investigación hemos podido comprobar que la mayoría de los pobladores perciben que la Iglesia está más cerca de los pobres que de los ricos. Cf. CERC, «Creencias y valores en Lo Hermida», *Informe de Investigación* no. 1, Area Religión y Sociedad, CERC, Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, mayo 1988; «Creencias y valores en José María Caro» *Informe de Investigación* No. 2, id. y «Creencias y valores en Huamachuco», *Informe de Investigación* No. 3, id.

<sup>57</sup>Cf. Las recientes declaraciones de los Obispos:

-Comité Permanente del Episcopado, *La Carta del Comité*, Miércoles de Cenizas de 1987.

-*Los desafíos de la reconciliación*, 22 de mayo de 1987.

-*Declaración*, Comité Permanente del Episcopado, 10 de Junio de 1987.

-*Al servicio de la paz*, 13 de agosto de 1987.

-*Declaración*, de Mons. Oviedo, Presidente en ejercicio de la Conferencia Episcopal de Chile, 2 de noviembre de 1987.

-*Que el Señor nos ilumine desde el pesebre*, 18 de diciembre de 1987.

-*En justicia y paz*, 22 de abril de 1988.

-*Buscamos la paz y el bien de todos*, 8 de junio de 1988.

<sup>58</sup>Cf. Conferencia Episcopal de Chile, *En Justicia y Paz*, 22 de abril de 1988.

<sup>59</sup>Cf. Smith, 1982: 345 ss.

<sup>60</sup>Cf. Correa, Viera-Gallo, 1986: 158-67.